



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

D. JAIME ALMENAR BELENGUER, Secretario del Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, en uso de las competencias que le otorga el artículo 40 del Reglamento de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, aprobado por Real Decreto 1994/1996, de 6 de septiembre,

CERTIFICA:

Que en la Sesión nº 37/05 del Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones celebrada el día 20 de octubre de 2005, se ha adoptado el siguiente

ACUERDO

Por el cual, en relación con el expediente **RO 2005/508** se aprueba la siguiente

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE PONE FIN AL PERÍODO DE INFORMACIÓN PREVIA A UN PROCEDIMIENTO SANCIONADOR CONTRA LAS ENTIDADES TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. Y TELEFÓNICA TELECOMUNICACIONES PÚBLICAS, S.A.U. POR EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE 20 DE NOVIEMBRE DE 2003 POR LA QUE SE OBLIGABA AL GRUPO TELEFÓNICA A GARANTIZAR EL ACCESO A LA NUMERACIÓN GRATUITA PARA EL LLAMANTE DESDE SUS TERMINALES DE USO PÚBLICO, UBICADOS EN EL DOMINIO PRIVADO, EN EL DOMINIO PÚBLICO Y EN EL DOMINIO PÚBLICO SUJETO A CONCESIÓN.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Presentación de los escritos de denuncia. Con fecha 30 de marzo de 2005 tuvo entrada en el Registro de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) escrito de la Secretaría de Estado de Economía, Dirección General de Defensa de la Competencia, del Ministerio de Economía y Hacienda, por el que remitía la denuncia presentada por D. David Ramírez Torres, interno del Centro Penitenciario Madrid IV, Navacarnero, en el que denunciaba la imposibilidad de utilizar tarjetas diferentes a las de TELEFÓNICA en los teléfonos de uso público instalados en dicho centro.



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

En los mismos términos, se presentaron denuncias de los internos Don Semey Joseph, Don Koldo Aparicio Benito, Don José María Casas Conde, Don Sebastián Alejandro Moreno Maya, Don Sergio Magán Tena y Don Moisés Hernández Motos, internos de los centros penitenciarios de Segovia, de El Acebuche, Almería, de Madrid III, Valdemoro, y de Puerto I, Puerto de Santa María.

SEGUNDO.- Apertura de un período de información previa. De conformidad con lo previsto en el artículo 69.2 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 12 del Reglamento de Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora (aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto), se acordó abrir un período de información previa con el fin de conocer las circunstancias del caso y la conveniencia o no de iniciar un procedimiento sancionador.

Por escrito de fecha 12 de abril de 2005 se comunicó a Telefónica de España, S.A.U. (en adelante, TESAU) y a Telefónica Telecomunicaciones Públicas, S.A.U. (en lo sucesivo, TTP) la apertura del período de información previa con relación a los hechos denunciados.

TERCERO.- Requerimientos de información. Mediante escritos de fecha 11 y 22 de abril de 2005, se requirió a los internos Don David Ramírez Torres y Don Semey Joseph, respectivamente, que comunicaran la empresa que aparecía identificada en el terminal telefónico al que se refería la denuncia presentada (exactamente el nombre de la empresa que figuraba en los terminales telefónicos del Centro Penitenciario), así como cualquier otra información de que dispusiera relativa a los hechos denunciados (en particular, si al haberse intentado llamar con tarjetas diferentes a las de TELEFÓNICA se oía algún mensaje por el que se impedía la comunicación y, en tal caso, qué es lo que decía ese mensaje).

Igualmente, mediante escritos de fecha 12 y 22 de abril se solicitaron a los Directores de los centros penitenciarios Madrid IV (Navalcarnero) y Segovia – centros a los que pertenecían los internos denunciados Don David Ramírez Torres y Don Semey Joseph- identificar la empresa con la que los centros penitenciarios, tenían contratados los terminales telefónicos disponibles al público del centro. Se solicitaba, asimismo, que se adjuntase el contrato suscrito con la citada entidad. Además de lo anterior, se requería de los centros penitenciarios cualquier otra información de que dispusiera relativa a los hechos denunciados, en particular, si tenía conocimiento de que al haberse intentado llamar con tarjetas diferentes a las de TELEFÓNICA se oyera algún



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

mensaje por el que se impidiera la comunicación y, en tal caso, el contenido del mensaje.

CUARTO.- Alegaciones de TELEFÓNICA TELECOMUNICACIONES PÚBLICAS, S.A. Con fecha 28 de abril de 2005 tuvo entrada en el Registro de esta Comisión escrito de TTP en el que exponía lo siguiente:

«Que con fecha 4 de marzo de 2004, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior, solicitó a mi representada (...) por estrictas medidas de seguridad, la instalación de un sistema informatizado a través del cual controlar las llamadas telefónicas realizadas por los presos desde las cabinas de uso público instaladas en los centro penitenciarios.

Que el 12 de julio de 2004, mi mandante suscribió el correspondiente Anexo al contrato original para la instalación de Teléfonos de uso Público, en virtud del cual, la Compañía desarrolla e instala el sistema de control de llamadas solicitado.

Que en virtud de la Cláusula Sexta del mencionado contrato, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias asume el compromiso de la tramitación y resolución de cuantas reclamaciones puedan surgir en relación con el control de las llamadas de los presos.»

Por todo lo anterior, TTP solicitaba se archivara el expediente iniciado.

Asimismo, y mediante escrito de fecha 11 de mayo de 2005, TTP se expresaba en los mismos términos arriba enunciados respecto de la denuncia presentada por el interno D. Semey Joseph, denuncia que le fue trasladada por escrito de esta Comisión de fecha 22 de abril de 2005.

QUINTO.- Contestación al requerimiento de información de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. Con fecha 28 de abril de 2005, tuvo entrada en el Registro de esta Comisión escrito de la Directora del Centro Penitenciario de Madrid IV, Navalcarnero, por el que manifestaba que el requerimiento de información efectuado había sido remitido a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias (área de Régimen), por ser quien tiene establecido el concierto telefónico, a nivel nacional, con la Compañía TTP y, por tanto, a quien corresponde cumplimentarlo. En los mismos términos se expresó el Director del Centro Penitenciario de Segovia, mediante escrito con fecha de entrada de 24 de mayo de 2005.



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

Así, con fecha 28 de abril y 30 de mayo de 2005, se recibieron en el Registro de esta Comisión escritos de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios y de la Subdirección General de Tratamiento y Gestión Penitenciaria en los que se exponía lo siguiente:

«Que entre las funciones que tiene encomendadas la Dirección General de Instituciones Penitenciarias está la de favorecer las comunicaciones entre los internos pero así mismo tiene la obligación de procurar que las mismas se efectúen con las medidas de seguridad necesarias.

Que hasta hace poco tiempo la línea telefónica constituía el vehículo en determinadas ocasiones para la comisión de transgresiones o delitos tales como extorsiones a terceros, relaciones con bandas mafiosas, amenazas a jueces, insultos a distintas Autoridades con las que contactaban, etc. Todo ello por la imposibilidad de conocer a quién iban dirigidas las llamadas de los internos.

Como consecuencia, la Dirección General se vio en la necesidad de establecer un mayor control en las comunicaciones telefónicas, a través de los medios técnicos disponibles en este momento. Y para ello con fecha 12 de julio de 2004 suscribió un Acuerdo con Telefónica Telecomunicaciones Públicas S.A. ampliatorio al contrato existente desde el 24 de octubre de 1994 con Cabinas Telefónicas S.A. (Cabitel). Mediante dicho acuerdo, TTP desarrolla y da acceso a un sistema de control de las llamadas que los internos realizan desde los teléfonos de uso instalados en los diferentes centros penitenciarios.

El sistema está basado en el control local mediante el propio teléfono, del uso que el interno haga de los servicios de telefonía. Para ello, todo interno de cualquier centro penitenciario, tiene asignado un código de identificación personal que le identifica de forma unívoca a nivel de centro penitenciario. En base a ese código de identificación personal, se define el perfil del interno, que incluye los números autorizados de llamada y alarmas asociadas.

Las competencias para efectuar (...) el control de las llamadas que realicen los internos desde los distintos centros penitenciarios, se encuentran reguladas en el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario.»

Adjunto a los escritos se acompañaban el Anexo de 12 de julio de 2004, y el contrato suscrito con fecha 24 de octubre de 1994.



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

Sexto.- Alegaciones de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. Con fecha 29 de abril de 2005 tuvo entrada en el Registro de esta Comisión escrito de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U (TESAU) en el que alegaba que:

«Que los terminales de uso público ubicados en el Centro Penitenciario (...) no son de titularidad de TESAU, sino que pertenecen a TTP, por lo que mi representada no puede controlar el acceso desde esos terminales al servicio telefónico fijo prestado al público por un determinado operador mediante emisión de tarjetas prepago.

Que en las llamadas gratuitas para el llamante mediante la utilización de tarjetas prepago a través de terminales de uso público que no sean de titularidad de TESAU, las funciones de mi representada consisten en proporcionar el acceso a la red telefónica garantizando el correcto encaminamiento de la llamada para su terminación en la propia red de TESAU o en la red de otros operadores en interconexión. Este proceso se realiza con total independencia de lo que suponen propiamente las restricciones en el acceso a determinada numeración desde el terminal de uso público, opción que es controlado por el titular del mismo.»

Por todo lo anterior, solicitaba se archivara el expediente respecto de TESAU.

Asimismo, y mediante escrito de fecha 13 de mayo de 2005, TESAU se expresaba en los mismos términos arriba enunciados respecto de la denuncia presentada por el interno D. Semey Joseph, denuncia que le fue trasladada por escrito de esta Comisión de fecha 22 de abril de 2005.

QUINTO.- Contestación al requerimiento de información efectuado a Don Semey Joseph y a Don David Ramírez Torres. Mediante escrito, con fecha de entrada en el Registro de esta Comisión de 17 de mayo de 2005, don Semey Joseph dio cumplimiento al requerimiento de información efectuado. En el mismo se señalaba:

«Que la denuncia interpuesta en este asunto es contra la Dirección General de Instituciones Penitenciarias y contra TELEFÓNICA, S.A. por el monopolio evidente en el sistema de llamadas establecido en las cabinas telefónicas públicas de la mayoría de los C.P. [Centros Penitenciarios] de España, entre ellos el de Segovia, en los que los internos son obligados a realizar sus comunicaciones Telefónicas solamente con tarjetas de Telefónica.

De la información solicitada por esta Comisión cabe indicar que la única empresa que aparece identificada en el terminal telefónico es Telefónica pues, al descolgar el auricular de la cabina y una vez introducido el código personal



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

interno del preso, la pantalla te indica que hay que insertar la tarjeta y directamente sale un mensaje escrito en el que la empresa Telefónica te da la bienvenida.

(...) que en el caso de intentar con códigos de tarjetas diferentes a las de Telefónica, sale un mensaje en la pantalla que pone "opción no disponible" y porque introdujeron un sistema informático programado sólo para la utilización de tarjetas de Telefónica, además la propia nota de Dirección que pusieron en el tablón de anuncios del C.P. de Segovia señala que solamente está permitido el uso de las tarjetas de Telefónica que solamente pueden adquirirse a través del funcionario del peculio e indicando la imposibilidad del uso de otro tipo de tarjetas diferentes a las de Telefónica.»

En términos similares dio cumplimiento al requerimiento de información el interno Don David Ramírez Torres, mediante escrito con fecha de entrada de 5 de mayo de 2005.

A los anteriores antecedentes de hecho les son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Calificación de los escritos presentados.

Los escritos presentados por los internos de los centros penitenciarios enunciados en los Antecedentes de Hecho de esta Resolución constituyen denuncias, en cuya virtud se ponen en conocimiento de la CMT determinados hechos que pudieran constituir una infracción administrativa tipificada en el artículo 53 letra r) de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones (en adelante, LGTel), que considera, como infracción muy grave, el incumplimiento de las Resoluciones adoptadas por la CMT en el ejercicio de sus funciones en materia de comunicaciones electrónicas.

Por medio de estos escritos de denuncia, los internos de los centros penitenciarios ponen en conocimiento de la CMT una supuesta situación de imposibilidad de acceso a determinada numeración desde terminales de uso público situados en los centros penitenciarios y la imposibilidad de acceder a la numeración más que con tarjetas prepago de la entidad Telefónica.

La conducta descrita en las denuncias podría suponer un incumplimiento de la Resolución de 20 de noviembre de 2003 por la que se obligaba al GRUPO TELEFÓNICA a garantizar el acceso a la numeración gratuita para el llamante



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

desde sus terminales de uso público, ubicados en el dominio privado, en el dominio público y en el dominio público sujeto a concesión. (Expediente DAEM 2003/938) y cuya vulneración podría concretar la infracción del artículo 53, r) de la LGTel antes mencionada.

De conformidad con el Resuelve segundo de la Resolución de 22 de mayo de 2003, por la que se ponía fin a un periodo de información previa¹, se procedió a la apertura de un procedimiento administrativo con número de expediente DAEM 2003/938 con la finalidad de analizar las prácticas restrictivas de la competencia en que habría incurrido TTP, al haber interrumpido el suministro de forma desproporcionada para fortalecer la posición de dominio de TESAU en el mercado del servicio de telefonía fija disponible al público.

Este procedimiento finalizó mediante la aprobación por el Consejo de esta Comisión, el 20 de noviembre de 2003, de la Resolución en la que se obligaba al Grupo Telefónica a cesar en la restricción del acceso desde los terminales de uso público titularidad de TTP a determinados números telefónicos empleados para prestar al público el servicio telefónico fijo mediante tarjetas prepago por parte de terceros operadores. Concretamente, se resolvió:

«Primero.- Con respecto a la conducta de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. y TELEFÓNICA TELECOMUNICACIONES PÚBLICAS, S.A.U.

La conducta del GRUPO TELEFÓNICA realizada a través de TELEFÓNICA TELECOMUNICACIONES PÚBLICAS, S.A.U. y analizada en la presente Resolución consistente en la restricción del acceso desde los terminales de uso público titularidad de TELEFÓNICA TELECOMUNICACIONES PÚBLICAS, S.A.U. a ciertos números telefónicos cuyas llamadas son gratuitas para el usuario llamante, en concreto los números empleados para prestar al público el servicio telefónico fijo mediante tarjetas prepago por parte de terceros operadores, constituye una conducta anticompetitiva materializada en una práctica discriminatoria al aplicar el GRUPO TELEFÓNICA, a través de TELEFÓNICA TELECOMUNICACIONES PÚBLICAS, S.A.U. condiciones diferentes a las tarjetas emitidas por empresas de dicho grupo con respecto a las demás tarjetas presentes en el mercado emitidas por otros operadores alternativos, lo que supone no sólo un abuso de la posición de dominio que el GRUPO TELEFÓNICA ostenta en el correspondiente mercado nacional de la telefonía de uso público en el dominio privado como actividad secundaria, dominio público y dominio público sujeto a

¹ Resolución de 22 de mayo de 2003, por la que se puso fin al período de información previa a un procedimiento sancionador contra las entidades TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. y TELEFÓNICA TELECOMUNICACIONES PÚBLICAS, S.A.U. por el presunto incumplimiento de las Resoluciones adoptadas por esta Comisión en materia de acceso a números 900 desde cabinas. (Expediente AJ 2002/7085).



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

concesión, sino también un refuerzo de la posición de dominio que ostenta TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. en el mercado del servicio telefónico fijo disponible al público.

Segundo.- Cese de la conducta constitutiva de discriminación

Se obliga al GRUPO TELEFÓNICA a cesar en la conducta a la que se refiere el Apartado Primero anterior del presente Resuelve, y a garantizar el acceso a la numeración gratuita para el llamante desde sus terminales de uso público, ubicados en el dominio privado, en el dominio público y en el dominio público sujeto a concesión.»

SEGUNDO.- Competencia de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 48.3 j), 50.7 de la LGTel, corresponde a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones el ejercicio de la potestad sancionadora de conformidad con lo establecido en el artículo 58 de esta Ley, es decir, cuando se trate de infracciones muy graves tipificadas en los párrafos q) a x) del artículo 53, infracciones graves tipificadas en el párrafo p) y, en el ámbito material de su actuación, en el párrafo q) del artículo 54, e infracciones leves tipificadas en el artículo 55, respecto de los requerimientos por ella efectuados.

De acuerdo con estos preceptos, compete a esta Comisión conocer de la cuestión planteada en las denuncias presentadas.

TERCERO.- Valoración de las actuaciones practicadas en el período de información previa.

De las denuncias presentadas por los internos se infería que el acceso desde terminales de uso público ubicados en los centros penitenciarios a través de la utilización de tarjetas telefónicas de compañías distintas a TELEFÓNICA, resultaba imposible.

Requeridos a TTP y TESAU sobre las denuncias vertidas, las partes manifestaron que la imposibilidad de acceso con otras tarjetas telefónicas distintas de las de TELEFÓNICA resultaba imposible como consecuencia de la instalación de un sistema informatizado a través del cual, y por estrictas medidas de seguridad, se controlan las llamadas telefónicas realizadas por los presos desde las cabinas de uso público instaladas en los distintos centros penitenciarios.



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

Este sistema de control de llamadas fue definido y desarrollado mediante la modificación del contrato originariamente suscrito con Instituciones Penitenciarias el 24 de octubre de 1994, a través de un Anexo firmado el 12 de julio de 2004.

Efectivamente, como consecuencia de la aparición en el mercado de nuevas tecnologías y del aumento de la población penitenciaria, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias entendió adecuado ampliar los sistemas de control en las comunicaciones de los internos con el exterior, por estrictas razones de seguridad. Así lo manifestó por carta de fecha 4 de marzo de 2004 a la entidad TTP con quien tenía suscrito contrato para la instalación de teléfonos de uso público.

El régimen penitenciario se regula en el Título II de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, que dispone en su capítulo VIII el régimen de comunicaciones y visitas de los internos. Es en este capítulo donde se recoge el derecho de los internos a comunicar con sus familiares, amigos y representantes acreditados de organismos e instituciones de cooperación penitenciaria, sin más restricciones, en cuanto a las personas y al modo, que las impuestas por razones de seguridad. Este derecho de comunicaciones y visitas se desarrolla en el Título II, capítulo IV del Reglamento Penitenciario, aprobado por Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero. Concretamente, y en relación con las comunicaciones telefónicas, el artículo 47 del Reglamento, fija los requisitos y forma de realizar este tipo de comunicaciones. Así, se establece la previa solicitud al Director del establecimiento penitenciario para que el interno pueda comunicarse con otra persona, y una frecuencia máxima de cinco llamadas por semana, con una duración no superior a cinco minutos.

Para poder hacer efectivas las medidas de control establecidas por la normativa vigente en relación con las comunicaciones telefónicas de los internos, de autorización al número llamado, frecuencia y duración de las llamadas, Instituciones Penitenciarias solicitó un desarrollo informático a TELEFÓNICA. Este sistema está basado en el control local, en el propio terminal, del acceso del interno a los servicios de telefonía. Para ello, a todo interno de cualquier centro penitenciario, se le asigna un código de identificación personal. Con el código de identificación personal se define el perfil del interno, incluyendo los números autorizados de llamada y las alarmas asociadas que generen la intervención o desconexión de la llamada en curso.

La introducción y actualización de los parámetros de personalización del interno se realiza a través de la red privada de Instituciones Penitenciarias, mediante un terminal de acceso remoto al centro de Gestión que residirá en cada uno de los centros penitenciarios. A través de esta red privada se ejecuta la actualización de los terminales de uso público desde el centro de Gestión y,



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

viceversa, el terminal solicita los datos de los internos inscritos en cada módulo concreto de un centro penitenciario.

Este sistema está soportado mediante una red privada de Instituciones Penitenciarias, que fue desarrollado mediante la modificación del contrato original de fecha 24 de octubre de 1994, a través de un Anexo firmado el 12 de julio de 2004 con TTP. De esta forma, el abonado al servicio telefónico no es el interno del centro penitenciario, sino Instituciones Penitenciarias, ya que conforme a la definición incluida en el Anexo 2 de la LGTel, abonado es *«cualquier persona física o jurídica que haya celebrado un contrato con un proveedor de servicios de comunicaciones electrónicas disponible para el público para la prestación de dichos servicios»*. En este caso concreto, el interno que utiliza los terminales ubicados en el centro penitenciario concreto no puede calificarse como abonado.

Conforme a lo anterior, es el abonado del servicio quien decide cual va a ser el proveedor del servicio telefónico. En este caso concreto, el abonado al servicio telefónico es Instituciones Penitenciarias y será quien decida, siempre de conformidad con la Ley 53/1999, de 28 de diciembre, de Contratos de las Administraciones Públicas, la provisión del servicio concreto. En este sentido, las características del servicio específico han sido desarrolladas conforme a las necesidades de seguridad de la normativa penitenciaria, y las mismas fueron ajustadas a través de la modificación del contrato suscrito con la entidad TTP, tal y como se refleja más arriba.

Como consecuencia, del examen de los escritos remitidos por las partes, y del estudio del Anexo al contrato suscrito por Instituciones Penitenciarias y por TTP, esta Comisión considera que, con carácter previo, es posible concluir que no existen indicios que permitan afirmar que el Grupo Telefónica está incumpliendo la Resolución de referencia, cuyo objeto era evitar la realización por éste de prácticas anticompetitivas.

En el presente caso, la imposibilidad de acceso desde los terminales ubicados en los centros penitenciarios a numeración utilizando como medio de pago tarjetas prepago de compañías diferentes a TELEFÓNICA, es consecuencia de la aplicación, por estrictas medidas de seguridad, del sistema de seguimiento y control de las llamadas realizadas por los internos, aprobado y autorizado por Instituciones Penitenciarias, como consecuencia de la aplicación de la Ley Orgánica General Penitenciaria y su Reglamento de desarrollo.

Vistos los citados antecedentes y fundamentos jurídicos, esta Comisión



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

RESUELVE

Único.- No iniciar procedimiento sancionador, por estimar que no existen indicios de incumplimiento por parte de TELEFÓNICA TELECOMUNICACIONES PÚBLICAS, S.A. de la Resolución de 20 de noviembre de 2003.

El presente certificado se expide al amparo de lo previsto en el artículo 27.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y el artículo 23.2 de la Orden de 9 de abril de 1997, por la que se aprueba el Reglamento de Régimen Interior de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, con anterioridad a la aprobación del acta de la sesión correspondiente.

Asimismo, se pone de manifiesto que contra la resolución a la que se refiere el presente certificado podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante esta Comisión en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su notificación o, directamente, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1.ocho de la Ley 12/1997, de 24 de abril, de Liberalización de las Telecomunicaciones, la Disposición Adicional cuarta, apartado 5, de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo, y el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de lo previsto en el número 2 del artículo 58 de la misma ley.

EL SECRETARIO

Vº. Bº. EL PRESIDENTE,

Jaime Almenar Belenguer

Reinaldo Rodríguez Illera.